

TRIBUNAL SEXTO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO JUEZ DOS, SAN SALVADOR; a las quince horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de agosto del año dos mil veintitrés.

En la causa penal con número de referencia **15-23-6CCO-J2(3)**, seguida en contra del procesado:

Relacionado inicialmente como **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ÁLVAREZ** de 46 años de edad, soltero, administrador, con fecha de nacimiento doce de febrero de mil novecientos setenta y siete, originario de San Salvador, departamento de San Salvador, portador del Documento Único de Identidad número 02535236-7, hijo de Patricia Elena Alvarez Guthrie y Jorge Alfredo Muyschondt 1 Parker, quien según DUI reside en Colonia Escalón, Quinta cake Poniente, casa #5357, San Salvador, San Salvador, a quien se le atribuye los delitos calificados de manera provisional como **a) FAVORECIMIENTO A LA EVASION**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** y **b) REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**.

I. PARTES INTERVINIENTES.

En Audiencia de Imposición de Medida Cautelar relacionada a la presente causa penal, celebrada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, han intervenido como partes:

En calidad de Agente Auxiliar del Fiscal General de la República, de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción, los licenciados **DOUGLAS FRANCISCO MARTÍNEZ MORALES** y **RAFAEL SEBASTIAN AVALOS OCHOA**.

En calidad de Defensora Público, el licenciado **JULIO CESAR MOJICA PEREZ**, en el ejercicio de la defensa técnica del procesado **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ÁLVAREZ**.

II. INCIDENTES.

No obstante haber consultado a las partes intervinientes en el momento procesal oportuno durante el desarrollo de la Audiencia de Imposición de Medidas Cautelares si tenían incidentes algunos que plantear, éstas han manifestado cada uno y por separado no tener incidentes.

II. COMPETENCIA

Respecto a la figura procesal de la competencia, el art. 15 de la Constitución, establece el principio de legalidad como parte de las garantías de todo procesado que garantiza que este sea juzgado conforme a las leyes preexistentes al hecho que se le impute y ante el Tribunal competente.

En ese sentido, resulta de vital importancia verificar si la autoridad judicial requerida se encuentra dotada de competencia para ejercer, en ese caso, la labor jurisdiccional que de manera abstracta le ha sido conferida por ley, en virtud de que el juez tiene encomendada la función de velar por el fiel cumplimiento de todos los derechos y garantías legalmente dispuestos a favor de quienes se someten al proceso penal.

Es así que la competencia se configura dentro del proceso penal como un presupuesto procesal indispensable para el correcto funcionamiento del sistema de enjuiciamiento de la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, es decir, no son las partes ni el juez los que deben definir de manera discrecional la sede judicial encargada de dirimir el conflicto penal,

sino que la competencia para ello estará determinada por las disposiciones legales correspondientes; así se verifica en resoluciones de incidentes 49- COMP-2010 y 25-COMP2011, de fechas 14 de diciembre de 2010 y 7 de diciembre de 2011, respectivamente. Por tanto, la competencia es una materia cuya regulación se encuentra reservada exclusivamente a las disposiciones legales que sean aplicables al caso que se conoce y, como consecuencia, no puede ser interpretada de manera distinta a las reglas contenidas en aquéllas.

Además, este Juzgador destaca el cuidado que debe de tenerse al efectuar la interpretación de las reglas de la competencia, pues la misma no debe transgredir derechos y garantías de las partes, sino más bien coadyuvar a que el proceso penal instruido en contra del imputado se tramite en la vía jurisdiccional idónea, ello partiendo de los elementos que dentro del proceso consten para la delimitación. La Constitución de la República, en su artículo 172, regula que las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establecen las leyes secundarias integran el Órgano Judicial. Corresponde a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia penal, pero así mismo esta competencia penal por la exigencia de protección a bienes jurídicos instaurados en la constitución y esa obligación del estado de proteger al ser humano como origen y el fin de su existencia, artículo uno de la constitución, se ha creado la competencia funcional especializada para Crimen Organizado.

En relación a lo anterior es aplicable lo establecido en la Resolución de la Sala de lo Penal de Ref. C 73- 03 /30-sep-2003, en la que señala que... "El Estado debe responder con mayor fuerza ante este tipo de criminalidad y por ende sacrificar algunos de los derechos fundamentales, siempre que se realice dentro del marco de aplicación del principio de proporcionalidad, entre la severidad de enfrentar esta delincuencia y la infracción de los derechos del ciudadano. También entiende este Tribunal que se han realizado cambios en los cuerpos normativos, reconociendo procedimientos que garanticen resolver eficientemente el problema de la delincuencia organizada, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y funcionalidad a través de la administración de justicia"...

Así también de acuerdo al Art. 4 LCCO- "Corresponderá a la Fiscalía General de la República conforme a las diligencias de investigación, la determinación de la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por tribunales comunes o especializados. Sin embargo, cuando los elementos recogidos durante la fase de instrucción determinen que el proceso debió iniciarse en un juzgado especializado se le remitirá de inmediato a éste (...)"

En primer lugar, el concepto de crimen organizado del art. 1 inciso 2º de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado consiste en: "aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio". De lo antes expuesto, se desprende que un caso puede considerarse como de crimen organizado cuando se cumplen los siguientes requisitos: 1) Que estemos frente a un grupo de 3 o más personas; 2) Que ellos estén estructurados; 3) Que se mantengan en cierto tiempo de forma concertada; y 4) Que el propósito sea el de cometer uno o más delitos graves y tener algún beneficio.

| Doctrinariamente Luis Alonso Bruceet Anaya, en su obra El Crimen Organizado (Origen, Evolución, Situación y Configuración de la Delincuencia Organizada en México) Editorial Porrúa, 2001, pagina 60-61 define el crimen organizado como *"Una sociedad que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de estructuras tan complejas, ordenadas y disciplinadas como las de cualquier corporación, mismas que están sujetas a reglas aplicadas con gran rigidez, se caracteriza porque sus acciones no son impulsivas, sino más bien, resultados de provisiones a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividad y así amasar grandes oportunidades de dinero o de poder real, su pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa, más para propósito de protección; en caso extremo el propósito de la delincuencia organizada no es competir con el gobierno sino utilizarlo"*

Por otra parte, en la sentencia de inconstitucionalidad 6-2009, pronunciada por la Sala de lo Constitucional a las 16:00 horas del 19 de diciembre de 2012, en lo esencial y pertinente se establece: “ (...) gramaticalmente cuando se utiliza el término “organización”, ella requiere dentro de una concepción adecuada y estricta del término, que los miembros de la misma actúen dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos, con posibilidad de sustitución de unos a otros mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto criminal con cierta independencia de las personas integrantes de la organización y que dificulten de manera extraordinaria la persecución de los delitos cometidos, aumentando al mismo tiempo el daño posible causado... En consonancia con lo anterior, es posible comprender la plenitud de tales requisitos, en orden a evitar dificultades probatorias, tomando como base un concepto de crimen organizado orientado a las consecuencias, en cuya esencia dos o más personas programen un proyecto, un plan o propósito para el desarrollo de la acción criminal, sin que sea precisa la existencia de una organización más o menos perfecta, bastando únicamente un principio de organización de carácter permanente. En este último sentido, ha de requerirse judicialmente una especial continuidad temporal o durabilidad que vaya más allá del simple u ocasional consorcio para el delito”.

Lo anterior es compartido por el autor Ángel García Collantes, en su ensayo “Delimitación Conceptual de la Delincuencia Organizada” de fecha primero de julio del año dos mil catorce en el que expresa que “la primera necesidad para definir la delincuencia organizada tiene como punto de partida diferenciar la organización criminal de una simple asociación para delinquir. Esto es, se está ante algo más que una simple agrupación de personas que se juntan para delinquir [...] de esta forma, de la delincuencia individual forman parte sin tener nada que ver con el crimen organizado, los actos delictivos puntuales de pluralidad de intervinientes que eventualmente comparten vínculos de fondo pero sin estructuras, ni distribución de papeles precisos, aunque ciertos individuos pueden desempeñar papeles dominantes.”

Según la Corte Suprema de Justicia en el conflicto de competencia 1-COMP-2022 de las once horas y veinte minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós (...) para determinar si un caso debe ser sometido a la jurisdicción penal especializada o a la ordinaria, el acto delictivo atribuido a un imputado o a varios debe estar acreditado bajo un nivel de probabilidad positiva de que el ilícito fue cometido por un grupo o una organización delictiva, en la que se hayan establecido las responsabilidades asignadas a los mandos y sus miembros y las relaciones que existen entre sus integrantes de la cúpula decisoria y los ejecutores y que la razón de reunirse es con “el fin o propósito de delinquir”; aclarando que cuando se establece la expresión “con el fin”, el legislador no exige que se haya ejecutado la comisión de un delito, sino que esa sea su intención. (...)

En vista que se ha realizado una investigación indiciaria por parte de la representación fiscal, en la cual se ha verificado la posible existencia de los delitos de **a) FAVORECIMIENTO A LA EVASION**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** y **b) REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA** dichos delitos ponen en riesgo la administración de Justicia, y Pública, es decir buscan un desequilibrio estatal, y como se ha citado previamente “**el propósito de la delincuencia organizada no es competir con el gobierno sino utilizarlo**” en ese sentido se ha desplegado una investigación que continuara en la etapa instructiva para determinar quienes a parte del procesado han posiblemente participado desde la planificación hasta la ejecución y consumación de los hechos previstos como delito por la ley penal.

Desestabilizar un estado, en el contexto político y social, generalmente se refiere a actividades destinadas a socavar el orden y la estabilidad de un país de manera deliberada y sistemática. Esto puede incluir acciones como subversiones, intentos de golpe de estado, actos terroristas, sabotajes y otros actos que amenacen la seguridad nacional, la cohesión social y el funcionamiento normal de las instituciones estatales.

En muchos casos, desestabilizar un estado involucra acciones coordinadas y planificadas, lo que puede caer bajo la categoría de crimen organizado. Los grupos o individuos que se dedican a desestabilizar un estado pueden buscar obtener poder político, promover agendas ideológicas, obtener ganancias económicas o simplemente sembrar el caos y la discordia.

El crimen organizado en este contexto no se limita necesariamente a actividades delictivas tradicionales como el tráfico de drogas o la extorsión, sino que también puede abarcar actividades políticas y sociales que buscan socavar la estabilidad del país y podrían poner en riesgo su soberanía.

En el presente caso toma gran relevancia en virtud que, si bien es cierto, el bien jurídico tutelado es la administración pública y administración de justicia, indirectamente los hechos que conllevan a la adecuación típica, involucran que presuntamente se revelaba información de la ubicación del ciudadano presidente Nayib Armando Bukele, es decir información que al ser obtenida y divulgada podría prestarse para un atentado, y poner en riesgo la estabilidad estatal.

En ley contra el crimen organizado es latente el hecho que su finalidad es evitar que se amenace o ponga en peligro la seguridad nacional y la integridad del estado. El objetivo de perseguir y sancionar el crimen organizado en casos de desestabilización es mantener la seguridad y el orden dentro del país, así como proteger los derechos y el bienestar de sus ciudadanos, es pertinente citar que el Art.2 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional que establece que Crimen Organizado es *“Un grupo delictivo organizado, de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directamente o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio material.”*

Por lo que el suscrito Juez delimita los siguientes elementos: (a) grupo compuesto de tres o más personas, lo cual en el presente proceso si bien es cierto inicialmente, tenemos a un sujeto activo que presuntamente ha cometido hechos punitivos antes descritos, la investigación fiscal conlleva deductivamente a que los receptores de dicha investigación aparentemente es una estructura organizada, en donde el imputado tendría un rol de facilitador de información, es corroborado en el presente proceso indiciariamente con la documentación presentada, b) estructurado de manera indiciaria se cuenta que se entabla peticiones precisas de personas como el ex presidente Funes Cartagena, en la que se ha requerido información, por lo que hay una estructura política a la cual pertenece el referido, acogida según por el conocimiento popular en Nicaragua; (c) que exista durante cierto tiempo el cual de acuerdo con las diligencias presentadas se obtienen conversaciones del año dos mil diecinueve; y (d) actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos, lo cual al análisis de los hechos nos encontramos en una etapa embrionaria en donde se realizaran y recopilaran elementos tanto de cargo como de descargo que establecerán cual es el propósito criminal al exteriorizar conductas aparentemente punitivas.

En cuanto a la complejidad en materia procesal, el crimen Organizado esta se relaciona con las dificultades probatorias que entraña la persecución de los denominados delitos *no convencionales*, estos son *aquellos que generan un enorme daño social, concreto o potencial, para el desarrollo político, social y económico de la población en general, y en los que se afectan prioritariamente intereses colectivos y difusos.*

Dentro del ámbito de la no convencionalidad, se relacionan –y se mencionan sin pretensión de exhaustividad– los delitos contra el medio ambiente, fraudes fiscales, monopolio, oligopolio, competencia desleal, defraudaciones bancarias, fraudes al consumidor, y delitos que afectan a la **Administración pública**, en particular la corrupción pública –malversación, cohecho, peculado, negociaciones ilícitas.

En estos casos, su mera incorporación al Código penal o la modificación sancionatoria que se les pueda dispensar resulta insuficiente para su castigo; así, en ocasiones resulta necesario que el diseño de enjuiciamiento penal responda al grado de complejidad técnica que conlleva su realización. La LCCO no se refiere al concepto sustantivo de complejidad, ni al procesal; sino

que se trata de una interpretación *sui generis* que fija la competencia acerca de hechos que no necesariamente revelan desde el inicio o dentro de su diligenciamiento, dificultad probatoria alguna

Desde esta perspectiva, cuando se ejecuta de manera planificada cualquiera de los delitos antes citados, mediante una organización de naturaleza permanente, con cierto nivel de jerarquización y en los que existe una disociación entre los que deciden y ejecutan, tal reparto de funciones, generará fuertes dificultades para las instancias públicas de persecución, requiriendo para ello –por ejemplo– el uso de los denominados métodos extraordinarios de investigación para su efectiva comprobación, los cuales deberá de utilizar la representación fiscal en el presente proceso, en consecuencia **Por las razones ut supra los hechos presentados son de competencia especializada de Crimen Organizado, por lo cual se arroga la misma.**

IV. HECHOS ATRIBUÍDOS.

La presente investigación tiene su origen por haber surgido publicaciones realizadas en los periódicos Digitales ULTIMAHORA.SV y Diario La Huella, este ultimo de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se señala que en redes sociales circulaban diversas denuncias en contra de Alejandro Muyschondt, quien al parecer brindó información confidencial o de carácter privado al expresidente Mauricio Funes, en el caso del periódico Digital ULTIMAHORA.SV, publicación de fecha cuatro agosto de dos mil veintitrés, en la que se señala que se hicieron públicas conversaciones entre el ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena y el señor Alejandro Muyschondt, quien funge como asesor de seguridad nacional de la presidencia de la República de El Salvador; es por ello que se recibió instrucción por parte del señor Fiscal General de la República de aperturar expediente en la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción.

Por la instrucción recibida, se inició investigación en la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción, siendo así que en fecha cinco de agosto del año dos mil veintitrés se solicitó al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, hiciera una búsqueda dentro de la red social Twitter (hoy “X”), para que se pudiera encontrar distintas fuentes de información de esta red, información relacionada a las conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, conversaciones en las cuales se revelaba información concerniente a la ubicación del presidente Nayib Bukele e información que pudiera ser útil al señor Funes Cartagena a efectos de evadir la justicia Salvadoreña. Esta última idea es sustentada por el hecho de que desde el año dos mil dieciocho han surgido órdenes de captura por parte de diferentes sedes judiciales en contra del ex presidente Mauricio Funes Cartagena.

Es así que se iniciaron las primeras diligencias de investigación y se procedió a solicitar a la Presidencia de la República de El Salvador informe sobre el señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez y si esta persona laboraba para dicha dependencia del Estado, obteniendo como respuesta en fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés, constancia emitida por la licenciada Norma Estela Vásquez Sigüenza, gerente de recursos humanos de la Presidencia de la República, en la cual hace constar, que el señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez, tiene el cargo de Asesor del Área en Administración General en la Presidencia de la República de El Salvador y que este empezó a trabajar en la referida dependencia de El Estado en fecha tres de junio del año dos mil diecinueve.

En razón de la información recibida y al establecerse que el señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez efectivamente es empleado de la Presidencia de la República de El Salvador, es que se acredita su calidad de Empleado Público, del que le nacen los deberes u obligaciones que refiere el artículo 66 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, citando dichos deberes a continuación:

“Artículo 66. Los deberes de los empleados públicos son:

- 1) Desempeñar el trabajo que se les encomiende con dedicación y esmero;

- 2) Asistir al Despacho con puntualidad y decoro;
- 3) Guardar disciplina, subordinación y compostura en asuntos del servicio;
- 4) Guardar reserva sobre los asuntos de que tuvieren conocimiento con motivo de su cargo;
- 5) Permanecer en la oficina todo el tiempo establecido en los horarios vigentes;
- 6) Cumplir las normas contenidas en los instructivos y circulares que les sean comunicados,
- y
- 7) Las demás que las leyes y reglamentos les señalen.

“Del numeral cuarto del artículo en mención, se debe resaltar que al señor Alejandro Muyshondt, por ser empleado público del Órgano Ejecutivo le nace la obligación de confidencialidad que todo funcionario o empleado público debe de guardar de todas aquellas actuaciones, informes, datos u otro tipo de información que por su cargo pudiera haber tenido conocimiento; generando con ello la prohibición legal de divulgación o revelación a terceras personas no autorizadas para su conocimiento.

Así como también, se procedió a solicitarle al señor Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Director General de la Policía Nacional Civil; certificación de todas las órdenes de captura emitidas por diferentes sedes judiciales en contra del ex presidente de la república de El Salvador Mauricio Funes Cartagena; siendo así que se recibió oficio suscrito por el comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, Jefe de la Secretaría General de la Policía Nacional Civil por medio del cual remitió certificaciones de oficios de órdenes de captura y ratificaciones de esta emitidas por diferentes sedes judiciales en contra del señor Mauricio Funes Cartagena.

De la remisión de órdenes de captura por parte de la Policía Nacional Civil, se debe de resaltar que existen dos órdenes de captura en contra del señor Mauricio Funes Cartagena que son anteriores al día 11 de once de agosto del año dos mil diecinueve; fecha que según captura de pantalla que circulaba en la red social Twitter (hoy “X”), se reflejaba una conversación entre el señor Alejandro Muyshondt y el ex presidente de la república Mauricio Funes Cartagena, en el cual se le advertía a este último que no se desplazara a la república de Panamá porque se tenía información de dicho desplazamiento; siendo así dichas ordenes las siguientes:

- 1- Oficio n° 2347 de fecha 14 de noviembre del año dos mil dieciocho, suscrito por la licenciada Nelly Edith Pozas Henríquez, juez cuarto de paz de San Salvador; por medio del cual ordenó la detención del imputado Carlos Mauricio Funes Cartagena por atribuírsele el delito calificado provisionalmente como Cohecho Activo en perjuicio de la Administración Pública.
- 2- Oficio n° 964 de fecha 03 de abril del año dos mil diecinueve, suscrito por el licenciado Carlos Edgardo José Bendix Contreras, juez octavo de paz de San Salvador; por medio del cual ordenó la detención del imputado Carlos Mauricio Funes Cartagena por atribuírsele el delito calificado provisionalmente como Evasión de Impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública.

Con la información antes mencionada, se revela que efectivamente el ex presidente de la república de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, al momento de sostener conversación con el señor Alejandro Muyshondt; es considerado como una persona sobre quien pesaban dos órdenes de captura, por ende ya era prófugo de la justicia salvadoreña y que cualquier información que este recibiere relacionada a su ubicación presente o futura, pudiese generarle una ventaja a efecto de no ser alcanzado por la Justicia salvadoreña.

Así también no se debe pasar en alto, que cualquier tipo de información relacionada al señor Presidente de la República Nayib Bukele, como son sus actividades, reuniones, ubicación, etc.; puede generar eventuales riesgo a su integridad física y que este en razón del cargo que ostenta, como máximo representante de la soberanía del Estado goza de protección especial según lo establecen los incisos uno y dos del artículo 1 de la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial, el cual se cita a continuación:

“Artículo 1. Gozarán de medidas de protección especial, las personas que en razón de la actividad que realizan, cargo o posición que ostenten o hayan ostentado; así mismo,

aquellas personas que a consecuencia de la finalización definitiva del conflicto armado, y por el rol que desempeñaron y la relevancia del mismo, puedan convertirse en objetivos potenciales de agresiones o atentados contra sus vidas, las de sus familiares o sus bienes, a quienes se denominará para efectos de esta Ley "Personas de Alto Riesgo." (4)

Se consideran siempre para los efectos de esta ley, como personas de alto riesgo, quienes hayan desempeñado los cargos de Presidente de cualquiera de los Órganos fundamentales del Estado y del Vicepresidente de la República, quienes gozarán de la protección establecida por esta Ley, de por vida...."

Continuando con el desarrollo de la presente investigación, tal como se enunció en párrafos anteriores se procedió a solicitarle al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, hiciera una búsqueda dentro de la red social Twitter (hoy "X"), para que se pudiera verificar de distintas fuentes de información dentro de esta red; si efectivamente existían imágenes o videos de conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente de la república de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, conversaciones en las cuales se revelara información concerniente a la ubicación del presidente Nayib Bukele e información que pudiera ser útil al señor Funes Cartagena a efectos de evadir la justicia Salvadoreña.

Es así que en fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés, se recibió informe de recopilación de información en fuentes abiertas, elaborado por el analista Jorge Alberto Majano Portillo de la Unidad de Análisis del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de Fiscalía General de la República; donde se establecían dos conclusiones de sumo interés para la presente investigación, que son las siguientes:

- 1- En el periodo del 28 de julio al 7 de agosto de 2023, se identificaron publicaciones realizadas directamente por el usuario de la cuenta <http://twitter.com/FunesCartagena?s=20>, relacionados a las conversaciones filtradas con el usuario "@AMuyschondt", se ilustra (33) imágenes captadas de las publicaciones de interés, así como el link donde se encontraron disponibles en la fecha de verificación.
- 2- Las fechas en la que los usuarios "@AMuyschondt" y "@FunesCartagena", sostuvieron conversaciones por medio de la red social Twitter (hoy "X") según el video publicado por la usuaria "@LauraPocaSV", son los meses de Julio, Agosto y Octubre del año dos mil diecinueve y abril del año dos mil veinte y con el video publicado por el usuario "@MrElegantesv" donde refiere que los mensajes dentro de esta, es entre los usuarios antes mencionados, es en los meses de julio y agosto del año dos mil diecinueve.

Posteriormente en fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, se presentó a las instalaciones de Fiscalía General de la República una persona quien manifestó que deseaba brindar información acerca de unas capturas de pantallas en las que observó conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, pero por temor a represalias en su contra, solicitó se le dieran medidas de protección y en ese sentido se le otorgaron medidas de protección ordinarias y por ende se le asignó la clave 8-2023.

Es así que se hizo presente una delegación fiscal de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de Fiscalía General de la República, a efecto de poder tomar entrevista a esta persona, por anunciar que tiene información útil en relación a una investigación que se había iniciado en la referida unidad; manifestando en dicho acto el testigo con régimen de protección clave 8-2023 que el conocimiento que tiene acerca de estos mensajes es debido a que en el año 2011 empezó a trabajar con el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, perteneciendo a un equipo consultor de este; ejerciendo el cargo de técnico informático y que la principal función de este equipo consultor era la creación de estrategias digitales; dependiendo dicho equipo directamente del señor Mauricio Funes Cartagena. Así también el testigo clave 8-2023 manifestó en relación a la cuenta de Twitter (hoy "X") del ex presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, que se adquirió un sistema especial de seguridad, para el manejo de la cuenta de Twitter @FunesCartagena, generando para el acceso de dicha cuenta, llaves especiales de seguridad las cuales solo tenían un par de personas del referido equipo

consultor y el ex presidente Funes Cartagena quien poseía la llave maestra de la referida cuenta, incluyendo al testigo como una de las personas que tenían dicho acceso especial, dicha clave especial de seguridad la mantenía en un dispositivo móvil personal.

Seguidamente el testigo clave 8-2023, manifestó que cuando observó que en la red social Twitter se empezaron a mostrar conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el expresidente Mauricio Funes Cartagena que le parecieron ser constitutivas de delitos; ya que este último en la misma red social hizo público que su cuenta de Twitter había sido hackeada; ante esto y con la finalidad de evitar algún señalamiento o represalias a su persona por su anterior vínculo laboral, es que intentó desde su dispositivo móvil ingresar a la cuenta de Twitter @FunesCartagena, logrando acceder, encontrando conversaciones en el DM (Mensajes Directos) entre Alejandro Muyschondt y el expresidente Mauricio Funes Cartagena del año dos mil diecinueve, conversaciones en las cuales se reflejaba una comunicación acerca del gobierno actual, por lo que decidió realizar capturas de pantalla y videos a dichas conversaciones y las resguardo en ese mismo dispositivo móvil.

Al consultarle al testigo 8-2023, sobre el contenido de las conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex Presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, este manifestó recordar dos conversaciones que habían sucedido en el año dos mil diecinueve, no recordando fecha exacta de estas; siendo dichas conversaciones las siguientes:

- Primera Conversación.

“ el señor Alejandro Muyschondt le decía al ex presidente Funes Cartagena: “Que le iba a devolver el favor, advirtiéndole que había una alerta de que el señor Mauricio Funes iba a viajar a Panamá a Unibank y que están pensando capturarlo en dicho lugar” a lo que el ex presidente Funes le responde: “Que estaba loco, si el no piensa salir de Nicaragua por el régimen que el goza”, contestando a ello Alejandro Muyschondt: “que la información era válida porque habría surgido de un ex colaborador de él, de nombre Mariano Cáceres” respondiendo a esto el expresidente Funes: “que sí, conocía a esta persona pero que no había trabajado con él.”

- Segunda Conversación

“ el ex presidente Mauricio Funes le dice a Alejandro Muyschondt: “Que le iba a dar un consejo, que tuviera cuidado con las personas que estaban cerca del presidente Bukele, dándole como ejemplo que él seguía recibiendo información de diferentes fuentes que en ese momento estaban “Tostando” en REPRES y que habían varios colaboradores del Presidente Bukele y que esta información se la hacían llegar colaboradores de Funes que aún estaban en esos círculos”, respondiendo a ello Muyschondt: “que gracias por la información”, posteriormente el ex presidente Mauricio Funes le pregunta a Muyschondt: “ si el presidente Bukele se encuentra en casa presidencial a lo que Alejandro responde que no, pero que estuvo hace unas horas”

Finalmente, el testigo con régimen de protección clave 8-2023 manifestó, que todas las capturas de pantalla y video que había realizado sobre las conversaciones que se dieron en la red social Twitter (hoy “X”) entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente Mauricio Funes Cartagena, quedaron almacenadas en su dispositivo celular y que dichas capturas las había realizado en fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés.

Posteriormente en fecha quince de agosto del año dos mil veintitrés, el testigo con régimen de protección clave 8-2023; amplió la entrevista dada en sede fiscal en fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, manifestando recordar una tercera conversación entre el asesor de la Presidencia de la República Alejandro Muyschondt y el ex Presidente de la República Mauricio Funes Cartagena siendo la siguiente:

Tercera Conversación.

“ el presidente Mauricio Funes le pregunta a Alejandro Muyschondt “ A esto te referís con lo del seguimiento que me están dando a mí y a mi familia” adjuntando un tweet del presidente Nayib Bukele haciendo referencia que el hijo del señor Funes Cartagena se encontraba

trabajando en la cancillería de Nicaragua, adjuntando imagen del referido Tweet, así mismo le dijo que esos documentos los había dado para adquirir una casa y una cama al crédito; respondiendo Muyschondt que si efectivamente eso ya se lo había contado anteriormente, que eso era lo de los venezolanos; contestando el señor Mauricio Funes "que si estos venezolanos eran de Maduro", respondiéndole Muyschondt que él no tenía conocimiento sobre la ideología de estas personas que le estaban dando seguimiento.

Seguidamente Muyschondt aconsejó al ex presidente Funes Cartagena, que al tener una estrecha y buena relación con el presidente Ortega, este debería pedirle que le ayudara con el cambio de identidad de sus familiares pero que obviamente a él no podría ayudarle por ser una figura pública; seguidamente el ex presidente Funes Cartagena le preguntó al señor Alejandro Muyschondt si no tenía conocimiento sobre quien le había pasado la información de su hijo al presidente Nayib Bukele, no contestándole Muyschondt al respecto, cambiándole el tema y diciéndole que él mismo se había boicoteado, porque había estado celebrando lo de China-Taiwán, reiterando que el mismo se ha boicoteado y que el ya no forma parte del equipo de festejo; diciéndole en esta misma conversación que el venezolano que le intento vender información acerca de él, lo más seguro es que se la haya vendido a alguien más..."

Al recopilar los anteriores elementos de investigación y bajo un pensamiento lógico jurídico de estos, se puede establecer indiciariamente los siguientes puntos:

- Que efectivamente el señor Alejandro Muyschondt, ostenta la calidad de empleado público dentro de la Presidencia de la República de El Salvador como Asesor desde junio del año 2019.
- Que este posee la obligación legal de guardar secreto sobre todas las actuaciones, informes, datos u información que en razón de su cargo conozca y como tal tiene prohibida la divulgación de esta información.
- La existencia en la red social Twitter (hoy "X") de imágenes y videos que revelan conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena.
- De las diferentes conversaciones que circulaban en la social Twitter (hoy "X") entre el señor Alejandro Muyschondt y el ex presidente Funes Cartagena; se resalta que existe una comunicación constante entre ambos y que, entre los temas de conversación se tienen actuaciones y ubicación del presidente de la República Nayib Bukele e información relacionada sobre el estatus del ex presidente y prófugo de la justicia salvadoreña el señor Mauricio Funes Cartagena.
- La existencia de una fuente independiente (testigo con régimen de protección clave 8-2023) vinculada directamente con el señor Funes Cartagena, que da un grado de certeza sobre las conversaciones entre el señor Alejandro Muyschondt y ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena que circularon en la red social Twitter (hoy "X")
- Que la información objeto de revelación por parte del señor Alejandro Muyschondt supone una clara vulneración a los protocolos de seguridad del señor Presidente de la República Nayib Bukele y una clara ventaja y conocimiento por parte del señor Funes Cartagena a efectos de poder evadir cualquier acción de la justicia Salvadoreña.
- Que los temas de conversación del señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez con terceros; generan una preocupación real respecto al hecho de una divulgación o revelación de información que este por su cargo dentro de la Presidencia de la República tenía acceso; divulgación o revelación que pueden afectar a la Soberanía del Estado Salvadoreño.

La última acotación, es de vital estudio e investigación por parte de la representación fiscal dentro del presente caso; en razón que con lo anteriormente detallado y con los indicios que posteriormente se delimitaran, se observa indiciariamente un tipo de deslealtad y revelación de información que puede ser considerada como reservada, por parte del señor Jorge Alejandro Muyschondt Alvarez, quien por su cargo de asesor de Presidencia de la República este tenía;

divulgación o revelación de información por parte de dicho imputado que puede llegar a vulnerar bienes jurídicos abstractos como lo son La administración de Justicia, La Administración Pública o en un caso mayor vulnerar la existencia, seguridad y organización del Estado Salvadoreño; por medio del cometimiento de ilícitos penales graves como Espionaje, Traición, Revelación de Secretos de Estado, etc. Esta última acotación, se logrará establecer o desvanecer por medio de diligencias de investigación que se realizarán en el desarrollo del presente proceso. Todo lo anterior devenido del hecho de las revelaciones realizadas por el señor Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez.

V. CALIFICACIÓN JURÍDICA

A continuación, se establece la calificación jurídica de los ilícitos penales de **FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, de la siguiente manera:

a) **ART. 318 FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN**

“El que procurar, facilitar o permitiere la evasión de una persona detenida o condenada, será sancionado con prisión de cinco a diez años. Si se tratare de un funcionario, empleado público, agente de seguridad o autoridad pública encargada de su custodia o resguarda, se impondrá además inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público. “

Bien Jurídico Protegido.

Este tipo penal protege el bien jurídico del interés estatal en la efectividad de determinadas resoluciones judiciales en las que se impongan medidas o penas privativas de libertad. Aunque se mencione detención, lo que podría plantear la posibilidad de incluir la detención administrativa, la equiparación de penas entre el quebrantamiento de detención y de prisión.

TIPICIDAD:

ELEMENTOS OBJETIVOS

CONDUCTA HUMANA (ACCIÓN u OMISION)

Primero es de aclarar que al derecho penal solamente le interesa la conducta (acción u omisión) humana socialmente relevante, por encontrarse desvalorada (desvaloración de acción o de resultado).

La redacción del tipo prevé tanto las modalidades de omisión y acción; para el caso en estudio se hace referencia a una modalidad propiamente de acción no de omisión, en la que el sujeto activo “procura, facilita o permite”, que otro sujeto pueda sustraerse del cumplimiento de una orden judicial que pesa sobre él; no importando si con dicho acto el sujeto activo que comete la acción obtiene o no un beneficio propio o ajeno.

En el presente caso, se ve manifestado el actuar aparentemente doloso, por parte del señor **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ** quien por su cargo de Asesor dentro de la Presidencia de la República de El Salvador, el cual ha acreditado la representación fiscal, tenía acceso a información de carácter clasificada, privada y propia del conocimiento de este órgano del Estado y que presuntamente irrespetando su obligación de confidencialidad y sin contar con una debida autorización o causa de justificación, decidió facilitar a una persona sobre quien pesan órdenes de detención provisional, información útil para que este evada la justicia salvadoreña.

ELEMENTO SUBJETIVO

Según la conversación entre el señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez y el ex presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, indiciariamente que hay una manifestación de la voluntad y conocimiento propio del señor Muyschondt Álvarez, que este decide dar información que en razón de su cargo obtuvo del señor Funes Cartagena, información que al analizarse bajo los parámetros de la lógica común, conllevan a que el señor Funes Cartagena pueda evadir una vez más la Justicia Salvadoreña; quien para ese momento sopesaban sobre este dos órdenes de captura. Es así, que según lo detallado anteriormente el señor Jorge Muyschondt con conocimiento y sin ningún tipo de coacción a su voluntad presuntamente decide dar esta información al señor Funes Cartagena.

SUJETO ACTIVO

Para el caso que nos ocupa, nos referimos únicamente al primer apartado del tipo penal, estableciendo que puede ser cualquier persona no importando una cualidad en especial, siempre que sea distinta del propio evadido, incluso un empleado o funcionario, siempre que no esté encargado de la custodia o guarda del evadido.

Es acá donde podemos observar, que el presente tipo penal en su primer apartado, no requiere una cualificación especial respecto a la persona que comete las acciones referidas en el tipo penal, estableciendo así que cualquier persona puede cometer este delito, por no ser considerado un tipo penal con un sujeto activo especial. Sino que solamente se hace la exigencia que la persona realice una de las acciones identificadas en el tipo penal.

SUJETO PASIVO.

Es el Estado de El Salvador, al ser el ente jurídico con la potestad soberana de administración de justicia; siendo así que cada una de las resoluciones que se emiten deben de ser respetadas y cumplidas siempre y cuando no contraríen la Constitución de la República y sus leyes.

CONDUCTA TÍPICA

Se hace referencia a los verbos rectores procurar, facilitar o permitir, que abarcan todas las conductas en las que el sujeto activo por acción u omisión, coopera a la evasión, de modo que este artículo contempla actos de complicidad o cooperación necesaria, elevados a la categoría de delito autónomo.

Para la configuración de este tipo penal, se requiere que se exteriorice como conducta típica, la acción que describen los verbos procurar, facilitar o permitir, que abarcan todas las conductas en las que el sujeto activo, por acción u omisión, coopera en el favorecimiento de la evasión, delito que debe ser realizado con conocimiento y voluntad, es decir, con dolo, lo cual exige que el sujeto activo facilite, procure o permita a otro sustraerse definitivamente, o, al menos, por tiempo indefinido¹, siendo así que el tipo penal se configura al momento que el sujeto activo realice uno de los tres verbos rectores indistintamente realice solamente uno de ellos.

Es así que primeramente debemos de definir que, el verbo rector el cual se le atribuye al señor Alejandro Muyschondt es el verbo "FACILITAR". El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra facilitar de la siguiente manera: "Hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin o proporcionar o entregar²", de la anterior definición

¹ Resolución de Recurso de Casación n°60-2019, de las quince horas del ocho de abril del año dos mil diecinueve, emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente, Santa Ana, El Salvador.

² facilitar | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE

y al relacionarla al tipo penal que nos ocupa se pueden llegar a establecer esencialmente dos aspectos:

- Que lo que facilite el sujeto activo debe ser algo beneficioso y necesario para el sujeto quien deseaba evadir la acción de la justicia.
- Debe de tener como fin, dar una ayuda o cooperación que aunque sea mínima, hacia una persona que desea evadir una decisión judicial que limite su libertad ambulatoria.

Al realizar un juicio lógico de la adecuación de las anteriores premisas al caso objeto de investigación, se resalta primeramente que el señor Alejandro Muyschondt al ser asesor de la presidencia de la República de El Salvador, poseía un cargo bajo el cual tenía conocimiento de información de carácter sensible y reservada dentro de este organismo del Estado, incluyendo dentro de este tipo de información, situaciones relacionadas a ex presidentes de la república.

Bajo la anterior idea y continuando con el juicio lógico enunciado, observamos que la información aparentemente proporcionada de manera voluntaria y consciente por parte del señor Alejandro Muyschondt al expresidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena, era información relacionada primordialmente a este último, información que según investigación de la representación fiscal le fue beneficiosa y necesaria a efecto que este pudiera seguir evadiendo la justicia salvadoreña; en virtud que el señor Funes Cartagena al momento de las conversaciones poseía dos órdenes de captura en su contra por los ilícitos penales de Evasión de Impuestos y Cohecho Activo, emitidas por dos distintas sedes judiciales del país, generando con esto que verídicamente la información proporcionada tenía el carácter de beneficiosa y necesaria.

En relación así la ayuda o cooperación dada por Alejandro Muyschondt al ex Presidente la República Mauricio Funes Cartagena tenía un fin; que según indiciariamente era de manifestarle **“ Que no viajara a Panamá, porque se tenía información de ello”**, se denota un objetivo principal que el cual es que el señor Funes Cartagena siga evadiendo las decisiones judiciales por medio de las cuales se le dictaminaron detención provisional; y que según constan en la carpeta judicial tales decisiones judiciales de distintas sedes fueron fundamentadas en razón de la existencia de los parámetros que establece el artículo 329 del código procesal penal salvadoreño, como lo son *fumus boni iuris* y *periculum in mora*.

AUTORIA:

Según el artículo 33 del código Penal, son *“autores directos los que por sí o conjuntamente con otro u otros cometen el delito”*, es decir, que el legislador no le interesa distinguir entre autor y co-coautor, ya que en ambos casos tienen dominio sobre el hecho, tanto los que por sí ejecutan todos los actos del delito, como los que se reparten las tareas ejecutivas, *“...pero siempre que su intervención sea objetiva, sin que sea suficiente el mero concurso de voluntades...”*³.

Dominio del hecho es *“...tener en las manos el decurso del suceso típico abarcado por el dolo... ..autor es quien, como figura central del suceso, tiene el dominio del hecho conductor conforme a un plan y de esta manera está en condiciones de frenar o no, según su voluntad, la realización del tipo...”*⁴; y es bajo esta modalidad que se está reprochando la responsabilidad penal al señor JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ, debido a que aparentemente se han determinado los siguientes elementos:

a) Dominio del hecho, el cual aparece que tiene el sujeto activo ante el cometimiento de un ilícito penal con conocimiento y voluntad.

b) No exigencia de Calidad especial del sujeto Activo, siendo importante destacar ello en razón que, el primer apartado del tipo penal, no hace una exigencia de una cualificación especial

³ Serrano Piedecabras, op. cit. pág. 135.

⁴ Trejo, Miguel Alberto; La Participación en el Delito, artículo en trabajo colectivo denominado “Ensayos para la Capacitación Penal”, Concejo Nacional de la Judicatura, pág. 233 y ss.

del sujeto activo.

c) Capacidad de Ejecución, esta se refiere a que el sujeto activo del delito pueda tener una libre decisión y conocimiento de ejecutar la acción requerida por el tipo penal, no teniendo una causa de justificación de las establecidas en el artículo 27 del código penal salvadoreño que le ampare su realización.

a) REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL.

Se encuentra regulado en el Artículo 324 del Código Penal, el cual establece: “*El funcionario o empleado público que revelare o divulgar hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.*”

Si de la revelación o divulgación resultare grave daño a los intereses del Estado, la sanción podrá aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado”.

Del análisis de dicha disposición se establece que los requisitos que exige el tipo penal son los siguientes:

Bien Jurídico Protegido.

El Bien Jurídico Protegido: “es la eficacia de la actuación de la Administración, en cuanto esta puede necesitar que ciertos conocimientos permanezcan dentro de un círculo restringido de personas”.⁵

Según la obra compendio del Derecho Penal Español, (Parte Especial), de los autores Manuel Cobo del Rosal, Lorenzo Morillas Cuevas y otros, páginas 802, 803, nos dice: “*El bien jurídico afectado es el buen funcionamiento de la Administración Pública, que se ve alterado a causa de dicha revelación. Del mismo modo se protege dicho buen funcionamiento y la imparcialidad de la Administración prohibiendo el aprovechamiento del conocimiento de determinados secretos o informaciones reservadas a las que el sujeto accede y usa en beneficio propio o de tercero y en detrimento de la objetividad que debe regir la gestión pública, y, en consecuencia, de la comunidad ciudadana que confía en la privacidad de las informaciones y secretos que posee la Administración. Coherentemente con lo dicho, el sujeto pasivo de estos delitos lo es la Administración Pública, aunque también puede verse afectado el particular... Tal revelación ha de implicar la divulgación del contenido. Existe una gran flexibilidad en torno a los procedimientos a través de los cuales puede realizarse la conducta: lenguaje o escrito, gestos, una simple alusión, etc., incluso puede llevarse a cabo en la modalidad de omisivo, en comisión por omisión...”*

TIPICIDAD:

ELEMENTOS OBJETIVOS

CONDUCTA

Primero es de aclarar que al derecho penal solamente le interesa la conducta (acción u omisión) humana socialmente relevante, por encontrarse desvalorada (desvaloración de acción o de resultado).

La redacción del tipo prevé tanto las modalidades de omisión y acción; para el caso en estudio se hace referencia a una modalidad propiamente de acción no de omisión, en la que el sujeto activo “REVELARE O DIVULGARE”, *información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos* no importando si con dicho acto el sujeto activo que comete la acción obtiene o no un beneficio propio o ajeno.

⁵ Código Penal Comentado Tomo II, pág. 1062.

ELEMENTOS SUBJETIVO

La conducta es que exige el tipo penal es dolosa, sea con dolo directo o con dolo eventual.”

El sujeto activo tiene que ser consciente del carácter secreto del conocimiento, lo cual se concluye de la investigación realizada, ya que el imputado, tiene conocimiento de que por su calidad de empleado de la Presidencia de la República de El Salvador, tenía la obligación de cumplir con los deberes que se encuentran reguladas en el artículo 66 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, por lo que toda información que conozca en razón de su cargo, es reservada y no debe ser divulgada a terceros, por lo cual actuó con conocimiento y voluntad de trasgredir la norma jurídica y adecuar su comportamiento al presente delito, el cual se consumó cuando se produjo el resultado consistente en que personas no autorizados llegan a conocer el secreto o la información confidencial.

En el presente caso, se ve manifestado el actuar aparentemente doloso, por parte del señor **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ** quien por su cargo de Asesor dentro de la Presidencia de la República de El Salvador, el cual ha acreditado la representación fiscal, tenía acceso a información de carácter clasificada, privada y propia del conocimiento de este órgano del Estado y que presuntamente irrespetando su obligación de confidencialidad y sin contar con una debida autorización o causa de justificación, decidió revelar a una persona no autorizada para receptarla.

SUJETOS

Sujeto Activo.

Para establecer la calidad de sujeto activo del delito, es necesario hacer alusión a que se trata de un Tipo Penal Especial, es decir, que no cualquiera puede ser sujeto activo del delito, solo quien tenga la calidad que la norma señala, es decir, “Funcionario” o “Empleado público”, es así como el art. 39 numeral 1), del Código Penal, define que debe entenderse por Funcionarios públicos, para efectos penales, siendo: ...”*todas las personas que presten servicios, retribuidos o gratuitos, permanentes o transitorios, civiles o militares en la administración pública del Estado, del municipio o de cualquier institución oficial autónoma, que se hallen investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la organización y realización de los servicios públicos...*”

El artículo 39 numeral 3). Considera como: *“Empleados públicos y municipales, todos los servidores del Estado o de sus organismos descentralizados que carecen del poder de decisión y actúan por orden o Delegación del funcionario o superior jerárquico...”*

En tal sentido el imputado **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ**, tiene la calidad de Sujeto Activo del delito, por ser Empleado Público, ya que se cuenta en la carpeta judicial la constancia de fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés, suscrita por la licenciada Norma Estela Vásquez Sigüenza, en su calidad de Gerente de Recursos Humanos de la Presidencia de la República, consta, que el señor Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez, se desempeña con el cargo de **Asesor del Área en Administración General de la Presidencia de la República de El Salvador**, quien inicio sus labores en la referida dependencia, el día tres de junio del año dos mil diecinueve.

Sujeto Pasivo, es el Estado.⁶

2. Los verbos rectores del tipo penal son: “**REVELAR**” “**DIVULGAR**” o “**FACILITAR**”, en ese sentido Revelar va orientado al hecho de descubrir a otro lo ignorado o secreto, en otras palabras, la información secreta o escondida deja de serlo, **Divulgar** es la acción ya concreta de publicar, y **Facilitar** es hacer viable o posible algo o algún conocimiento o información, por ende es un delito de resultado.⁷

Con respecto a los elementos que exige el tipo penal es necesario establecer en el presente caso, que, hechos, actuaciones, información o documentación tienen carácter de reservados.

Para el caso, se ha establecido que el imputado Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez, es empleado de la Presidencia de la República de El Salvador, es que se ha acreditado que, en su calidad de Empleado Público, debe cumplir con los deberes que se encuentran reguladas en el artículo 66 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, siendo estos los siguientes:

- 1) Desempeñar el trabajo que se les encomiende con dedicación y esmero;
- 2) Asistir al Despacho con puntualidad y decoro;
- 3) Guardar disciplina, subordinación y compostura en asuntos del servicio;
- 4) Guardar reserva sobre los asuntos de que tuvieren conocimiento con motivo de su cargo;
- 5) Permanecer en la oficina todo el tiempo establecido en los horarios vigentes;
- 6) Cumplir las normas contenidas en los instructivos y circulares que les sean comunicados,
- y
- 7) Las demás que las leyes y reglamentos les señalen. “

En razón de ello, cobra relevancia el deber establecido en el numeral 4), ya que el imputado tiene la obligación de **Guardar RESERVA** sobre los asuntos de que tuviere conocimiento con motivo de su cargo.

Bajo ese orden de ideas, al hacer el respectivo juicio de tipicidad, se hace necesario determinar en cuál de los verbos rectores, encaja la conducta del imputado Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez, es decir, en “revelar, divulgar o facilitar”, en el presente caso el imputado ha presuntamente REVELADO, información confidencial, que conoció, en razón de ser empleado público del Órgano Ejecutivo, ya que tenía la obligación de confidencialidad, que debe tener todo funcionario o empleado público, en relación a todas aquellas actuaciones, informes, datos u otro tipo de información que por su cargo tenga conocimiento; sin embargo, el imputado Muyschondt Álvarez, no obstante tener esa prohibición legal, decidió aparentemente Revelar información reservada al ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena; revelación que se descubrió por medio de publicaciones en distintos periódicos digitales, siendo estas conversaciones las siguientes:

1-En esta conversación, el señor Alejandro Muyschondt le dijo al ex presidente Funes Cartagena: “Que le iba a devolver el favor, advirtiéndole que había una alerta de que el señor Mauricio Funes iba a viajar a Panamá a Unibank y que estaban pensando capturarlo en dicho lugar” a lo que el ex presidente Funes le respondió: “Que estaba loco, si él no pensaba salir de Nicaragua por el Régimen del que goza”, contestándole Alejandro Muyschondt: “que la información era válida porque había surgido de un ex colaborador de él, de nombre Mariano Cáceres” respondiendo a esto el expresidente Funes: “que si conocía a esta persona pero que no había trabajado con él”.

2-La segunda conversación está relacionada a que el ex presidente Mauricio Funes le dijo a Alejandro Muyschondt: “Que le iba a dar un consejo, que tuviera cuidado con las personas que estaban cerca del Presidente Bukele, ya que le comento, que él seguía recibiendo información de diferentes fuentes que en ese momento estaban “Tostando” en REPRES y tenía a varios colaboradores del Presidente Bukele, quienes le hacían llegar la información, respondiendo a ello

⁶ Código Penal de El Salvador Comentado, pág. 1062

⁷ Código Penal de El Salvador Comentado, pág. 1063.

Muyshondt: “que gracias por la información”, posteriormente el ex presidente Mauricio Funes le preguntó a Muyshondt: “ **si el presidente Bukele se encontraba en casa presidencial, respondiéndole Alejandro Muyshondt, que no, pero que había estado hacia unas horas**”;

Con lo cual se establece, que **REVELÓ INFORMACIÓN** a terceras personas no autorizadas para su conocimiento.

EL OBJETO

El objeto sobre el cual recae la protección al bien jurídico tutelado son “**hechos, actuaciones, información o documentos que debieron permanecer en reserva**”.

Bajo ese contexto podemos establecer que el objeto sobre el que recae la protección al bien jurídico, del presente caso, es la **INFORMACIÓN** que debió permanecer en **RESERVA**.

Así también de acuerdo al contrato de prestación de servicios personales agravado a la carpeta judicial celebrado el día veintiuno de junio del año dos mil diecinueve, se establece en la clausula a) Naturaleza del servicio, se establece que el contratista prestara sus servicios como asesor en las oficinas de la Presidencia de la República, teniendo las obligaciones que regula el funcionamiento de la Presidencia de la República y como tal la clausula F) del referido contrato establece los derechos y obligaciones del contratista, por medio del cual el señor Jorge Alejandro Muyshondt Alvarez se obligó a cumplir de manera diligente y eficiente las funciones plasmadas en la descripción de su cargo, así como guardar la reserva, discreción y confidencialidad en los asuntos que tenga conocimiento, aun después de haber cesado en el desempeño de ellas; en atención a esto se resalta que la información que estuviere conocimiento tiene la característica de reservada.

En ese sentido, se establece según la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 6 lit. e) que se considera información reservada: “es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas”; la calidad de información reservada es dada por la Presidencia de la República, quien se fundamenta en leyes vigentes.

AUTORIA:

Según el artículo 33 del código Penal, son “*autores directos los que por sí o conjuntamente con otro u otros cometen el delito*”, es decir, que el legislador no le interesa distinguir entre autor y co-coautor, ya que en ambos casos tienen dominio sobre el hecho, tanto los que por sí ejecutan todos los actos del delito, como los que se reparten las tareas ejecutivas, “*...pero siempre que su intervención sea objetiva, sin que sea suficiente el mero concurso de voluntades...*”⁸.

Dominio del hecho es “*...tener en las manos el decurso del suceso típico abarcado por el dolo... autor es quien, como figura central del suceso, tiene el dominio del hecho conductor conforme a un plan y de esta manera está en condiciones de frenar o no, según su voluntad, la realización del tipo...*”⁹; y es bajo esta modalidad que se está reprochando la responsabilidad penal al señor JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ, debido a que aparentemente se han determinado los siguientes elementos:

a) Dominio del hecho, el cual aparece que tiene el sujeto activo ante el cometimiento de un ilícito penal con conocimiento y voluntad.

b) Exigencia de Calidad especial del sujeto Activo, siendo importante destacar ello en razón que, se hace una exigencia de una cualificación especial del sujeto activo, que aparentemente si cumple el incoado.

⁸ Serrano Piedecosas, op. cit. pág. 135.

⁹ Trejo, Miguel Alberto; La Participación en el Delito, artículo en trabajo colectivo denominado “Ensayos para la Capacitación Penal”, Concejo Nacional de la Judicatura, pág. 233 y ss.

c) Capacidad de Ejecución, esta se refiere a que el sujeto activo del delito pueda tener una libre decisión y conocimiento de ejecutar la acción requerida por el tipo penal, no teniendo una causa de justificación de las establecidas en el artículo 27 del código penal salvadoreño que le ampare su realización.

VI. PROBABILIDAD INDICIARIA DE PARTICIPACIÓN Y ELEMENTOS INDICIARIOS.

Habiéndose agregado diligencias obtenidas y elementos indiciarios presentados por el mismo Ministerio Público Fiscal, los cuales han de ser analizados y esbozados respondiendo a la etapa procesal embrionaria en la que se encuentra el presente proceso penal, contándose para el caso de los encausados ya relacionados con los elementos que a continuación se detallan:

1. Copias simples de las publicaciones realizadas por el periódico Digital ULTIMAHORA.SV, de fecha tres de agosto del año dos mil veintitrés, en la que se señala que se hicieron públicas conversaciones entre el ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena y el señor Alejandro Muyschondt, quien funge como asesor de seguridad nacional de la Presidencia de la República de El Salvador; asimismo noticia periodística del Periódico Digital Diario La Huella, de fecha dos de agosto de dos mil veintitrés, en el que se señala que en redes sociales circulan diversas denuncias en contra del procesado, quien al parecer brindó información confidencial o de carácter privado al ex presidente Mauricio Funes Cartagena. **(FOLIOS 24-27 PIEZA 1)**
2. Certificación de Documento Único de Identidad del señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez. **(FOLIO 28 PIEZA 1)**
3. Oficio PNC. 1. 11-1017/2023, de fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés, suscrito por el Comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, jefe de la secretaría General de la Policía Nacional Civil; por medio del cual remite certificaciones de oficios por medio de los cuales tribunales ordenan o ratifican órdenes de captura en contra del ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena. **(FOLIO 29-39 PIEZA 1)**
4. Informe de Recopilación de Información en Fuentes Abiertas, de fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés; suscrito por el analista Jorge Alberto Majano Portillo de la Unidad de Análisis de Intervención de las Telecomunicaciones del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, **(FOLIO 40 PIEZA 55)** en el cual se establecen las siguientes conclusiones:
 - a) En el período del 28 de julio al 7 de agosto de 2023, se identificaron publicaciones realizadas directamente por el usuario de la cuenta <https://twitter.com/FunesCartagena?s=20>, relacionados a las conversaciones filtradas con el usuario "@AMuyschondt", se ilustran (33) imágenes captadas de las publicaciones de interés, así como el link donde se encontraron disponibles en la fecha de verificación.
 - b) En una de las imágenes compartidas en publicación del día 01 de agosto del 2023, desde la cuenta del usuario "@ElMinistro" en la red social "X", se hace referencia que la conversación dentro de la misma, fue entre los usuarios identificados como "@AMuyschondt" y "@FunesCartagena", lo cual, al observar dicha imagen no se puede confirmar que sea entre los mismos usuarios, ya que, solo se visualiza la imagen de perfil que mantiene en su cuenta el señor Alejandro Muyschondt "@AMuyschondt", la cual fue verificada hasta este día de elaboración del informe 07 de agosto del 2023, mediante el enlace siguiente: <https://twitter.com/AMuyschondt>.
 - c) En la publicación del usuario "@MrElegante", de fecha 01 de agosto del presente, se muestra un video de una duración aproximada de 00:01 :18 min. Donde se observa una comunicación por mensajería de la red social "X", entre "Alejandro Muyschondt" y otra persona, al parecer el señor "Mauricio Funes", donde el segundo le pregunta al primero:

"Solo una curiosidad: Y Nayib está en una reunión privada en la Residencia Presidencial? En estos momentos contestándole el primero: "Estuvo en CAPRES have unas horas Hace*" mensajes enviados el día 13 de julio de 2019 según imagen contenida en video.

- d) En las publicaciones de los usuarios "@MrElegantesv" y "@LauraPocSV", se identificaron videos, de similar contenido, sobre conversaciones en mensajería de la red social "X", al parecer entre los usuarios "@FunesCartagena" y "@AMuyshondt" donde se destacan algunas coincidencias como lo son: las fechas y horas de los mensajes, y diferencias como: el título del nombre, al poseer iconos adicionales y un color distinto en la verificación de la cuenta.
- e) Del contenido del video publicado el día 03 de agosto del 2023, desde la cuenta del usuario "@LauraPocaSV" en la red social "X", se visualizó una grabación de pantalla de un dispositivo móvil, donde se muestra el navegador con la página de la red social "X" perteneciente al usuario "@FunesCartagena", desplazándose a la opción de mensajería de la misma red social observándose la conversación entre los intervinientes: "Alejandro Muyshondt" y este proporcionándole un número telefónico: "Jefe agréguenme a Telegram +50379400791 aquí nada está seguro", enviado el "30 de agosto de 2019".
- f) Las fechas en la que los usuarios "@AMuyshondt" y "@FunesCartagena", sostuvieron conversaciones por medio de la red social Twitter (hoy "X") según el video publicado por la usuaria "@LauraPocaSV", son los meses de julio, agosto, octubre del año dos mil diecinueve y abril del año dos mil veinte; como el video-publicado-por el donde refiere que los mensajes dentro de esta, es entre los usuarios antes mencionados, es en los meses de julio y agosto del año dos mil diecinueve.

5. **Constancia de fecha siete de agosto del año dos mil veintitrés, extendida por la licenciada Norma Estela Vásquez Sigüenza por medio del cual se hace constar que el señor Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez ingresó a trabajar para la Presidencia de la República desde el día tres de junio del año dos mil diecinueve, desempeñando el cargo de Asesor en Administración General. (FOLIO 55 PIEZA 1)**
6. Entrevista de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, del testigo con régimen de protección clave 8-2023, quien se presentó a instalaciones de Fiscalía General de la República a dar información relacionada a unas capturas de pantalla que circulaban en la red social Twitter (hoy "X"), en las que se observó conversaciones entre el señor Alejandro Muyshondt y el ex presidente de El Salvador Mauricio Funes Cartagena; estableciendo como se entera de estas conversaciones, corroborando la veracidad de estas y estableciendo que efectivamente durante el año dos mil diecinueve existía una comunicación entre el asesor de la Presidencia de la República de El Salvador Alejandro Muyshondt y el ex presidente de la República Mauricio Funes Cartagena. **(FOLIO 56-57 PIEZA 1)**
7. Resolución Fiscal de las ocho horas del día nueve de agosto del año dos mil veintitrés, por medio del cual se fundamenta y se ordena la detención administrativa del imputado **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ**, por los delitos atribuidos. **(FOLIO 58-74 PIEZA 1)**
8. Oficio de fecha 09 de agosto del año dos mil veintitrés, dirigido al comisionado Rómulo Pompilio Romero, subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil, por medio del cual se le comisionó proceder a la detención administrativa del imputado **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ**, por los delitos calificados de manera provisional como **FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (FOLIO 75 PIEZA 1)**

9. Acta de Detención por Orden Administrativa de las doce horas con treinta minutos del día nueve de agosto del año dos mil veintitrés; por medio de la cual se deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la detención administrativa del imputado **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ALVAREZ**, por los delitos atribuidos **(FOLIO 76-80 PIEZA 1)**
10. Ampliación de Entrevista de fecha quince de agosto del año dos mil veintitrés, del testigo con régimen de protección clave 8-2023, quien se presentó nuevamente a instalaciones de Fiscalía General de la Republica; quien manifestó una tercera conversación entre el asesor de la Presidencia de la República Alejandro Muyschondt y el ex presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena; así también la fecha en que hizo las capturas de pantalla y video de conversaciones entre ambas personas. **(FOLIO 81 PIEZA 1)**
11. Acta de Incautación Temporal y Autorización de fecha once de agosto del año dos mil veintitrés, en la cual se hace constar que el testigo con régimen de protección clave 8-2023, autorizó para que de su dispositivo celular marca Apple, iPhone X, color negro, que en la parte de atrás se lee iPhone y en buen estado; se pudiera extraer únicamente las capturas de pantalla y video relacionados a conversaciones entre el asesor de la Presidencia de la República Alejandro Muyschondt y el ex presidente la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena. **(FOLIO 82 PIEZA 1)**
12. Acta de entrega y obtención de información, de fecha once de agosto del año dos mil veintitrés; en la cual se hace constar el procedimiento por medio del cual se realizó la obtención de información del dispositivo celular marca Apple, iPhone X, color negro, que en la parte de atrás se lee iPhone y en buen estado, proporcionado por el testigo con régimen de protección clave 8-2023; dispositivo que contenía imágenes y videos de conversaciones entre el asesor de la Presidencia de la República Alejandro Muyschondt y el ex presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes Cartagena. **(FOLIO 83 PIEZA 1)**
13. Acta de Devolución, de fecha once de agosto del año dos mil veintitrés; en la cual se hace constar que una vez finalizado la diligencia de extracción de información del teléfono marca Apple, iPhone X, color negro, que en la parte de atrás se lee iPhone en buen estado; se procedió a la devolución de este al testigo clave 8-2023. **(FOLIO 84 PIEZA 1)**
14. Informe de extracción de Dispositivo Móvil, de fecha 21 de agosto del año dos mil veintitrés; suscrito por la licenciada Ana Teresa Callejas Juárez, analista de Tecnología de Información y Comunicación de la Unidad de Análisis Forense del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de Fiscalía General de la República; en donde se detalla la extracción de información realizada al dispositivo celular marca Apple, Iphone X, color negro, que en la parte de atrás se lee iPhone y en buen estado del testigo con régimen de protección clave 8-2023; en donde se establece el procedimiento seguido para la extracción de información en dicho dispositivo móvil y la extracción de 65 capturas de pantalla de conversación utilizando la plataforma "X" (antes Twitter) entre los usuarios identificados como Mauricio Funes usuario @FunesCartagena y Alejandro Muyschondt usuario @AMuyschondt, de la cual se realizó su debida transcripción. Juntamente con dos anexos, siendo el anexo uno transcripción de conversaciones y el anexo 2 fijación de imágenes de video. **(FOLIO 85- PIEZA 1- FOLIO 371 PIEZA 2)**
15. Oficio de fecha veintidós de agosto del año dos mil veintitrés, dirigido a la licenciada Sara Lissette Gutiérrez Directora del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia; por medio del cual se solicita ratifique las medidas ordinarias de protección otorgadas por Fiscalía General de la República al testigo clave 8-2023. **(FOLIO 372 PIEZA 2)**
16. Copias Certificadas de Contratos de Servicios personales del señor Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez del año 2019 al año 2023, emitidas por la Gerencia de Recursos Humanos de la Presidencia de la República de El Salvador, mediante el cual se establece la

relación laboral del imputado Muyschondt Álvarez con la Presidencia de La República y las obligaciones que tenía con esta entidad. **(FOLIO 373-382 PIEZA 2)**

17. Oficio 185, de fecha 15 de agosto de 2023, suscrito por el señor Manuel Antonio Acevedo Lopez, en calidad de Gerente de Brigada y Jefe del Estado Mayor Presidencial, mediante el cual informa que la ubicación del Presidente de La República, es información clasificada como secreta y su divulgación pone en riesgo la seguridad del mismo y de su grupo familiar. **(FOLIO 385 PIEZA 2)**
18. Actas de entrevista de los agentes captores Sargento Andrés Valle y del cabo Elmer Marroquín; quienes por medio de sus declaraciones establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se procedió a la detención administrativa del imputado Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez. **(FOLIO 384-390 PIEZA 2)**
19. Copia simple de la solicitud de secuestro de las evidencias incautadas al imputado Jorge Alejandro Muyschondt Álvarez, presentada en el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla; por medio del cual se establece que existe una medida cautelar provisional sobre los objetos incautados al imputado a efecto de poder ser sometidos a diligencias de investigación del presente caso. (Diligencias que se solicitará sean enviadas a su Tribunal). **(FOLIO 391-394 PIEZA 2)**
20. Diligencias de nombramiento de Defensor Público al imputado Alejandro Muyschondt por medio del cual se le garantiza su derecho a la defensa técnica. **(FOLIO 397-398 PIEZA 2)**

VII. VALORACION DE LOS ELEMENTOS INDICIARIOS.

La finalidad de un proceso penal es alcanzar la justicia y determinar la responsabilidad de una persona acusada de cometer un delito la cual goza de presunción de inocencia, es una herramienta legal diseñada para garantizar que las personas procesadas sean tratadas de manera justa, que se respeten sus derechos fundamentales y que se llegue a una resolución imparcial y equitativa, buscando equilibrar los intereses de la sociedad y las garantías individuales del acusado, es decir el debido proceso penal legalmente instaurado.

La Ley Contra Crimen Organizado, en su artículo 17 establece la obligatoriedad de celebrar la audiencia de imposición de medida cautelar, previa presentación de la solicitud fiscal, dicha normativa especial, en su inciso ultimo establece "*en lo demás, se continuará según lo previsto en el código procesal penal, en el proceso común*" es decir la audiencia de imposición de medida cautelar vendría siendo una audiencia inicial en el proceso común.

El objeto principal de la audiencia inicial llámese aquí audiencia de imposición de medida cautelar, es concretar la imputación y decidir sobre la incoación del proceso, tras oír a las partes y al mismo imputado, a quien se recibirá declaración indagatoria en este acto. Esto supone asignar a la audiencia inicial, una importante función de garantía, en cuanto que la imputación inicial realizada por el Ministerio Fiscal necesariamente habrá de ser controlada por una autoridad judicial independiente, que además habrá de comunicar su contenido al imputado, al que se dará la oportunidad de ser oído sobre el contenido de la imputación y, solo entonces, se decidirá judicialmente sobre la incoación del proceso de forma motivada y tras valorar la verosimilitud de la imputación.

La presente resolución, de conformidad al artículo 144 del código procesal penal se emite bajo los siguientes rubros de razonamientos, debiendo abarcarse dos presupuestos o requisitos esenciales que en este caso son: i) la "*probabilidad positiva de la existencia de los hechos atribuidos*" y ii) "*la participación delictiva de los acusados*", para después hacer el examen de la medida cautelar, respecto a lo que es "*la apariencia de buen derecho*", y "*el peligro razonado de fuga*", que es el objeto de la presente audiencia de imposición de medidas.

En el proceso penal salvadoreño, toda persona goza de la presunción de inocencia, que solo puede ser quebrantada o vencida en juicio, debiendo tratarse en todo el proceso como sujetos y no como objeto procesal.

El objeto o discusión procesal, deberá tener la condición o virtualidad de que, a este nivel de examen del expediente, ya sea probabilidad, duda o certeza, la prueba o elementos recolectados sirvan para generar convicción suficiente; en caso de duda, favorable al imputado, en caso de probabilidad o certeza de la existencia del hecho y participación del mismo.

En tal sentido, los indicios o prueba de orden directo deberán ser legales, útiles y pertinentes, para formar esa convicción. A nivel de audiencia de imposición de medidas, no se exige la certeza para acreditar los hechos, sino exige un mínimo de actividad indiciaria, pero que tenga la misma calidad de ser legal, útil y pertinente, para demostrar la probable existencia del hecho atribuido y participación del imputado.

Como se mencionó al inicio por su carácter embrionario del proceso, en esta etapa de valoración no es necesario alcanzar el grado de certeza, por lo que se vuelve necesario recurrir a lo que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de Casación 139-CAS-2015, define como mínima actividad indiciaria y establece lo siguiente:

*“El indicio es un hecho que se prueba, asimismo, o que se encuentra probado y que permite por datos sensibles de la experiencia o de la ciencia, obtener el conocimiento de otro hecho que puede ser cierto o probable. La cita es del autor **Washington Ábalos, en su obra Derecho Procesal Penal, tomo dos, Buenos Aires Argentina, Editorial Cuyo, página quinientos cuarenta**, sigue la Sala en su discurso estableciendo lo siguiente: “la prueba indiciaria es valorable dentro de un proceso penal, pues no siempre puede recabarse una evidencia directa respecto del hecho investigado y por ello al ser estimados los indicios se harán con respecto a los hechos y la sana crítica, tal como lo ordena el artículo ciento sesenta y dos del Código Procesal Penal; es decir considerando las máximas de la experiencia y el sentido común, al analizar en conjunto todos los elementos probatorios que rodearon el hecho teniendo eficacia demostrativa la prueba referencial cuando se valora de manera conjunta con otros medios de prueba o al menos con otros indicios que complementan la virtualidad probatoria de aquella testifical dándole así la fuerza evidenciable que por sí sola no tendría; asimismo la existencia de prueba de esta naturaleza se ve justificada por el principio de libertad probatoria”.*

En tal sentido, se hace un breve examen depurativo de los elementos de convicción que la agencia fiscal incorpora en la carpeta judicial, y solicitud de imposición de medida cautelar; es decir, este juzgador tomará en cuenta lo que orienta la línea jurisprudencial sobre el concepto de indicios, y lo que la línea de Hábeas Corpus 130-2015, nos determina para considerar que son actos urgentes de comprobación y los actos puros de investigación, y sentadas las bases en que la línea en que se generará el discurso de la decisión.

Uno de los objetivos del derecho penal, es la obtención de la verdad real, lo cual, en su debido momento procesal, se puede obtener misma **Sobre el derecho a la verdad**, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “han sostenido que el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana”, y continúan señalando “Bajo dichas disposiciones, el derecho a la verdad comprende una doble dimensión. En primer lugar, se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a al cometimiento de delitos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos. Ello implica que el derecho a la verdad acarrea la obligación de los Estados de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los casos, no obstante lo anterior es

labor fiscal, como director de la investigación accionar el proceso penal, y acusar a los presuntos responsables cuando exista el cometimiento de hechos delictivos, en este caso es labor fiscal hacer la imputación, en relación al derecho de la verdad, y pronta y cumplida justicia, tomando como parámetros el respeto a los derechos y garantías del debido proceso penal”

Se han presentado elementos indiciarios, en relación a determinar la existencia del delito, este proceso por su carácter embrionario en esta etapa de valoración no es necesario alcanzar el grado de certeza, por lo que se vuelve necesario recurrir a lo que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de Casación 139-CAS-2015, define como mínima actividad indiciaria y establece lo siguiente: “*El indicio es un hecho que se prueba, asimismo, o que se encuentra probado y que permite por datos sensibles de la experiencia o de la ciencia, obtener el conocimiento de otro hecho que puede ser cierto o probable*”.

Por lo que indiciariamente En el proceso penal, dichos elementos por sí solo, puede no ser suficiente para probar la culpabilidad de una persona acusada de un delito, pero que, en conjunto con otros indicios o pruebas, puede ayudar a inferir o establecer la existencia de un hecho relevante para el caso. Los indicios son elementos circunstanciales que, cuando se consideran en conjunto, pueden apoyar una hipótesis o línea de razonamiento sobre la comisión del delito por lo que a este momento del proceso no ha sido destruida esa verosimilitud indiciaria de ese juicio de reproche o atribución y por lo tanto está acorde al criterio del artículo treinta y tres del Código Penal.

Asimismo el suscrito Juez no obvia el hecho, que el Testigo Clave 8-2023, en su entrevista de fecha ocho de agosto del año dos mil veintitrés, en la cual se detalla dos conversaciones, que al examinarse se pueden extraer dos ideas esenciales que se detallan a continuación:

- Primera Conversación.

“ *el señor Alejandro Muyshondt le decía al ex presidente Funes Cartagena: “Que le iba a devolver el favor, advirtiéndole que había una alerta de que el señor Mauricio Funes iba a viajar a Panamá a Unibank y que están pensando capturarlo en dicho lugar” a lo que el ex presidente Funes le responde: “Que estaba loco, si el no piensa salir de Nicaragua por el régimen que el goza”, contestando a ello Alejandro Muyshondt: “que la información era válida porque habría surgido de un ex colaborador de él, de nombre Mariano Cáceres” respondiendo a esto el expresidente Funes: “que si conocía a esta persona pero que no había trabajado con él.”*

De esta conversación se resalta, que se está brindando información relevante respecto a los movimientos del señor Funes Cartagena; información que conlleva un favorecimiento sin justificación alguna al ex presidente Funes Cartagena para que este siga evadiendo la acción de la justicia salvadoreña; información que bajo el estudio de la lógica jurídica es de conocimiento interno por parte de la Presidencia de La República, información compartida presuntamente por el procesado.

- Segunda Conversación

“ *el ex presidente Mauricio Funes le dice a Alejandro Muyshondt: “Que le iba a dar un consejo, que tuviera cuidado con las personas que estaban cerca del presidente Bukele, dándole como ejemplo que él seguía recibiendo información de diferentes fuentes que en ese momento estaban “Tostando” en REPRES y que habían varios colaboradores del Presidente Bukele y que esta información se la hacían llegar colaboradores de Funes que aún estaban en esos círculos”, respondiendo a ello Muyshondt: “que gracias por la información”, posteriormente el ex presidente Mauricio Funes le pregunta a Muyshondt: “ si el presidente Bukele se encuentra en casa presidencial a lo que Alejandro responde que no, pero que estuvo hace unas horas”*

De esta conversación presuntamente sostenida por el procesado, se observa que el revelar información acerca de la ubicación del presidente Nayib Bukele a un tercero no

autorizado, genera una violación directa a lo establecido en el artículo 1 de La Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial; siendo que toda información relacionada al ciudadano Nayib Bukele quien por estar ostentar el cargo de Presidente de la República de El Salvador, pudiere suponer una violación a los protocolos de seguridad que este posee, debe de ser considerada como reservada. Aunado a lo anterior de acuerdo al oficio ciento ochenta y cinco de fecha quince de agosto del año dos mil veintitrés, suscrito por el general de brigada Manuel Antonio Acevedo López, Jefe del Estado Mayor Presidencial, toda información relacionada a la ubicación del Presidente de la República de El Salvador, por la naturaleza de esta, se encuentra clasificada como secreta y su divulgación pone en riesgo la seguridad del señor Presidente de la República y su grupo familiar.

Por lo que Sobre la existencia del delito y la participación indiciaria del imputado hasta este momento procesal la evidencia mínima de carácter indiciaria orienta la existencia del injusto penal mediante el Informe de extracción de Dispositivo Móvil, de fecha 21 de agosto del año dos mil veintitrés; suscrito por la licenciada Ana Teresa Callejas Juárez, analista de Tecnología de Información y Comunicación de la Unidad de Análisis Forense del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de Fiscalía General de la República, el procesado *forma parte de los planes o proyectos criminales*. Por tanto, se ha establecido de manera indiciaria la existencia de los delitos atribuidos.

Finalmente, este Juzgador considera necesario destacar que los indicios no son pruebas directas o contundentes de culpabilidad, pero para esta etapa embrionaria son suficientes para sostener una eventual investigación instructiva, en relación a los delitos de **a) FAVORECIMIENTO A LA EVASION**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** y **b) REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, los cuales se le atribuyen al señor JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ÁLVAREZ.

VIII. MEDIDA CAUTELAR

En virtud de lo anterior, el Suscrito estima que los elementos descritos para esta etapa procesal son suficientes para tener por demostrados los extremos procesales que regula el artículo trescientos veintinueve del Código Procesal Penal, en ese orden de ideas, es necesario considerar y establecer a las partes procesales que, la libertad representa un papel nuclear en el sistema del Estado de Derecho, y por ello las privaciones de libertad han de hacerse con plenas garantías legales.

Partiendo de esta premisa, la detención provisional debe ser utilizada en nuestro sistema judicial, como un instrumento de prevención ante el inminente peligro de fuga de los imputados, es por eso, que el razonamiento del Juzgador para decretar la detención provisional debe de estar basado en la existencia del ilícito penal, situación que se ha podido colegir de las Diligencias de Investigación realizadas por la Fiscalía General de la República y que corren agregadas a la carpeta judicial.

En ese sentido debe entenderse que al proveerse la medida cautelar de privación de libertad, se ha justificado *el periculum in mora*, al considerar el suscrito que, razonablemente los imputados pueden sustraerse a la acción de la justicia, por la gravedad de la sanción penal a imponer, argumento que se debe adoptar como excepción a la regla general debido a la gravedad del delito que se le atribuye a los procesados, lo cual aumenta el peligro de fuga, debiendo de tal manera asegurar su comparecencia al juicio.

Aunado a lo anterior, resulta necesario desarrollar lo que se entiende como detención provisional, para ello la Sala de lo Constitucional, en su sentencia con número de referencia HC 217-2005, de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis, desarrollando que: "[...] la detención provisional ha sido caracterizada por la jurisprudencia de este tribunal como aquella medida

cautelar de carácter netamente personal, en virtud de la cual se priva a un presunto autor o partícipe de un hecho delictivo de su libertad física durante la sustanciación de un proceso penal.

Se advierte entonces que, a partir de su naturaleza estrictamente cautelar, su imposición debe perseguir fines constitucionales dentro del proceso penal: averiguar la verdad y asegurar la aplicación objetiva de la ley penal.

En efecto, tal custodia provisional durante el procedimiento penal constituye solamente una de las maneras de conseguir que se cumplan los fines del enjuiciamiento, a saber: la averiguación correcta de la imputación objeto del proceso, evitar entorpecer el descubrimiento de la verdad histórica, lograr el sometimiento del imputado al proceso para llevarlo a cabo - evitando realizar un juicio en contumacia- y, eventualmente ejecutar la condena. Por ende, es indiscutible su necesidad dentro del catálogo de aquellas medidas de coerción procesal que la autoridad jurisdiccional competente pueda utilizar.” (Sala de lo Constitucional, sentencia HC 217-2005)

De igual forma, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia de fecha doce de abril del dos mil siete, pronunciada en el proceso de Inconstitucionalidad 28-2006, se sostuvo que: “[...]la detención provisional tiene una naturaleza netamente asegurativa; y por tanto no se puede caracterizar como una sanción derivada de la infracción a una norma penal sustantiva. Por el contrario, es útil para el juzgador penal, a fin de ejecutar lo juzgado y evitar que el resultado del proceso quede burlado ante situaciones que podrían ser aseguradas mediante la tutela cautela.

A partir de estas consideraciones, que se han reiterado en múltiples pronunciamientos previos, esta Sala ha configurado la naturaleza de la medida cautelar con una concepción eminentemente procesal, y sólo bajo tal razonamiento su justificación adquiere sustento constitucional; de esta manera, también se descarta in limine que dicha medida pueda fundamentarse en criterios extraprocesales -control del crimen, peligrosidad social, prevención general e inocuidad, entre otras tesis históricas que se han desarrollado en ese sentido-.”

Por lo tanto, se debe de tener en cuenta la necesidad de dar vigencia al principio de excepcionalidad de la medida cautelar de la detención provisional y la necesidad de fundamentar ésta sobre la base de los presupuestos del *Fonus Bonis Iuris* y del *Periculum in Mora*, este último, representado, entre otros elementos, por el peligro de fuga y una posible ocultación u obstaculización de los medios de prueba, señalando para que se establezcan los requisitos siguientes: a) los criterios objetivos, los cuales se originan producto de circunstancias que dan la pauta para indicar que se ha configurado materialmente el delito en mención, y b), los llamados criterios subjetivos, los cuales se deduce por las mismas condiciones de forma y modo en que se efectuó el ilícito penal en comento, resultando innegable la concurrencia del dolo directo, tendiente a obtener como resultado, el logro de un interés en detrimento de otra persona, circunstancia que ha sido consecuencia de la exteriorización manifiesta, a través de la activación causal de un curso integrado de diversas acciones que nuestra legislación penal refuta como delictivas, pues no existe probanza alguna, en el presente proceso penal, que justifique plenamente tal proceder y que excluya de responsabilidad penal a los indiciados. Sobre este aspecto, es pertinente señalar que, en reiteradas ocasiones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que se puede considerar constitucionalmente legítimo que, se decrete la Detención Provisional, con respecto y con base al *Periculum in Mora*, teniendo en cuenta, únicamente como requisito procedimental, la gravedad del hecho y la pena a imponer.

En concordancia con lo consignado, es necesario reiterar que las circunstancias objetivas y subjetivas antes mencionadas y que pueden determinar el *Periculum in Mora*, de conformidad con el principio de excepcionalidad, deben entenderse que no actúan de modo mecánico o automático, sino que deben ejercer la función de parámetros o elementos de juicio, es decir, deben considerarse como circunstancias que atendieron las peculiaridades de cada caso concreto y por lo tanto, valorar y apreciar si existe peligro de fuga en el caso que nos atañe.

Este juzgador, fundamenta el peligro de fuga en la gravedad y la penalidad del delito, dos factores que podrían obstaculizar las diligencias de investigación, siendo en consecuencia, elementos con suficiente robustez legal para decretar la detención provisional y determinar que es constitucionalmente legítima, ya que se ha establecido la existencia de los elementos de convicción para estimar que el imputado es con probabilidad autore o participe del delito que se le atribuye, así como, los presupuestos procesales para decretar la detención preventiva o provisional, como lo son: **A) FUMUS BONI JURIS**: o apariencia de buen derecho, el cual está constituido por la acreditación positiva del hecho por el cual se pone en movimiento el sistema adjetivo jurisdiccional penal y la probable atribución o carga punitiva de la persona a quien se le señala la acción punible; y **B) PELIGRO DE FUGA Y OBSTACULIZACIÓN DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN**, siendo el parámetro de detención provisional más aceptada por la doctrina clásica y contemporánea en su carácter procedimental, ya que dentro del contenido de la ley adjetiva concurre una serie de líneas sobre aspectos específicos que deben analizarse al momento de decidirse sobre la existencia del extremo circunstancial del peligro de fuga. El peligro de fuga es la probabilidad de que un imputado, en caso de encontrarse en libre determinación de sus movimientos, se sustraiga de la acción de la justicia, evitando ser juzgado o bien, soslayando que dicha sustracción se realice de la eventual ejecución de la pena, ya que ello implicaría que los fines del proceso, bajo esa premisa, no se podrían desarrollar con entera normalidad.

En cuanto al peligro de obstaculización de las investigaciones se debe catalogar como un elemento causal meramente del procedimiento ya que si surge dicho parámetro, la averiguación de la verdad se tornaría nugatoria; por ello, la eventual actividad obstaculizadora de los imputados podría ser determinante en sentido negativo para la práctica de las diferentes diligencias útiles de investigación que la Fiscalía General de la República pretenda practicar, con la finalidad de llegar al esclarecimiento verídico de los hechos circunstanciales y que se suscitan alrededor del ilícito penal que se le atribuye a los mismos. Por otra parte, la medida cautelar por su carácter y naturaleza, al analizarla dentro de los parámetros que la sustentan, tiene en su contenido, características propias de límites a la libertad de una persona, sustentadas constitucionalmente, por los tratados internacionales y las leyes secundarias, las cuales solamente puede mantenerse mientras persistan las condiciones que les dieron origen, es decir que su aplicación se encuentra supeditada a la regla de la variabilidad *Rebus Sic Stantibus*. Que las medidas coercitivas no pueden tener carácter de una pena anticipada, la que se deduce del principio constitucional de presunción de Inocencia, representado en los artículos once y doce de la Constitución de La República, ello debe regularse, con respeto a la prisión preventiva, al disponerse que la misma, solo pueda ser acordada en los límites indispensables, para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley.

Asimismo, es menester traer a colación que el Art. 330 CPP, regula lo referente a "Otros casos de Detención Provisional", en el que dentro del numeral Segundo, se establece: Cuando por el comportamiento del imputado durante el procedimiento o las circunstancias del caso se infiera que intentará evadir la acción de la justicia o no sea posible acreditar sus arraigos domiciliario, familiar, laboral o cualquier otra circunstancia que indique su voluntad de someterse al proceso. Siendo el caso en particular que para el procesado en mención, no ha sido posible acreditar arraigos de manera suficiente, puesto que por parte de la defensa de no se ha incorporado documentación a fin de que los mismos puedan ser acreditados, tenemos que es aplicable dicho precepto, como otro motivo previsto para aplicar la detención provisional.

Dicho lo anterior dada la penalidad de los delitos atribuidos al incoado **por los delitos de a) FAVORECIMIENTO A LA EVASION**, previsto y sancionado en el artículo 318 C. Pn., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA** y **b) REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el artículo 324 C. Pn en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**, en el mejor de sus escenarios, podría imponer una penalidad mínima de nueve años máximo dieciséis años. Siendo que, la decisión de dicha medida, no obstante, de quedar justificado el exceso de la detención administrativa, en cuanto a las setenta y dos horas que tiene el ministerio público fiscal para someter un problema a la jurisdicción competente penal, y en este caso de

crimen organizado por el régimen de excepción, en donde habilita el artículo veintinueve inciso segundo en relación al artículo trece de la Constitución, para que se pueda presentar cualquier solicitud, en este caso la imposición de medidas, en el término de quince días; razón por la cual, se está dentro del plazo establecido; y habiéndose decretado el término de inquirir, en donde efectivamente, se hizo el análisis pertinente de la competencia a conocer del presente caso desde el principio al fin en el que se desarrollara el presente proceso penal.

Finalmente, este Juzgador advierte que los documentos que se han presentado en audiencia de imposición de medidas han sido valorados de manera integra para arribar al pronunciamiento de la medida cautelar a imponer y en ese sentido la **Cámara Primera Especializada de lo Penal de Santa Tecla, La Libertad, en el Incidente de Apelación 313-319-APE-2021, de las nueve horas siete minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, establece que:** “...se deben valorar verdaderos arraigos para decidir cuál medida cautelar corresponde aplicar; y no solo esto, sino qué otros aspectos como son los que regula el artículo 330 Pr.Pn., verbigracia: 1- La naturaleza de los delitos, 2- Número de delitos que se le atribuyen a cada imputado 3- Gravedad de los delitos que se le atribuyen, 4- Circunstancias que rodean el hecho, en cuanto a cuáles son las acciones que se les atribuyen a cada procesado, 5- El peligro de obstaculización, 6- Se debe analizar si existen verdaderos arraigos, ya que no se trata de que presenten constancias de personas que los conocen y externen su opinión que ellos tienen, o de constancias obsoletas y no vigentes, pues la palabra “arraigos” viene de la palabra latina de “echar raíces” ello significa en el contexto que nos ocupa, se deben de ofrecer garantías personales e idóneas que la persona tiene sólidas razones para no sustraerse del país ni del proceso; debiendo entonces analizar si hay peligro de obstaculización y peligro de fuga o demora, pues lo que se busca es evitar precisamente el peligro de fuga y que el sistema de justicia se quede burlado”.

En conclusión, considera el suscrito Juez que atendiendo al grado de participación que tiene el imputado en los delitos incriminados, más la gravedad de las penas de cada uno de los delitos, la nula documentación que en este etapa procesal se obvió presentar por la defensa con la finalidad de demostrar que posee arraigos –laboral, familiar y domiciliar- no es suficiente para desvanecer el Periculum In Mora, puesto que no existe una garantía que permita considerar que no se ausentarán de la continuidad del presente proceso penal, o que no interferirán en la obtención de medios probatorios en el mismo.

En ese sentido, en virtud de lo antes expuesto, es procedente **decretar la Medida Cautelar de Detención Provisional**, de conformidad con los artículos 329, 330 numeral 3 y 331 Inciso II, del Código Procesal Penal, en contra del imputado presente afecta el derecho a la libertad ambulatoria, el cual es un derecho fundamental de toda persona reconocido en el artículo 12 de la Constitución de la República y se considera la detención provisional como medida preventiva para los fines procesales, con el objeto de impedir que los procesados se fuguen u oculten o paralicen de esa manera la marcha del procedimiento, pues con la ausencia de estos dentro del proceso penal causarían graves perjuicios, ya que podrían aprovechar su libertad para entorpecer la investigación de los hechos y hacer más difícil la recolección de los elementos probatorios que los incriminarían, desplegando una maliciosa actividad con miras a impedir el esclarecimiento de la infracción investigada, puesto que en este caso en particular se ha vuelto una necesidad tal detención pues estamos ante un hecho grave de conformidad al Artículo 18 del Código Penal, ya que se ha menoscabado con acciones delictivas de varias personas a las que se les señala como responsables, un bien jurídico tutelado por nuestra legislación, y siendo que en esta etapa procesal bastan los indicios de participación para comprometer ese Bien Jurídico (Libertad),

IX. **RESERVA TOTAL DEL PROCESO.**

Este Juzgador, considera a bien otorgar la presente reserva de conformidad al artículo 307 del Código Procesal Penal con relación con el artículo 309 del mismo cuerpo normativo, esta Sede Judicial considera, que el artículo 6 de la Constitución de La República garantiza la

protección legal del Estado a la Libertad de Expresión de la población, pero tal y como se ha referido anteriormente en la presente resolución, todos los derechos encuentran limitantes pudiendo ser diversas las razones por las cuales se establecen las mismas, entre ellas se encuentra la protección a la intimidad de las personas, las de seguridad nacional o inclusive las de orden público, estableciendo entonces las disposiciones precitadas la posibilidad de decretar *excepcionalmente* la RESERVA TOTAL O PARCIAL del proceso en casos de que la declaratoria de la misma responda a la seguridad nacional o cuando la conservación del orden público lo requiera, tal es el caso del Régimen de Excepción vigente en nuestro país, razón por la cual y dada la información contenida en la carpeta judicial, en tal sentido, por lo tanto, es procedente **DECRETAR LA RESERVA TOTAL**, por lo cual, no estará permitido al público y prensa en general tener acceso al contenido del expediente, ni a saber quiénes son los involucrados, mucho menos a saber aspectos personales de estos, a efecto de salvaguardar su intimidad y dignidad, asimismo en atención al tipo de proceso, al tratarse de un delito complejo, existe una perturbación social, ocasionado por los homicidios cometidos hasta la fecha, lo que ha ocasionado que el ambiente se torne sensible y peligroso para jueces, fiscales, y demás personas que integran, por lo cual se pretende salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en el presente proceso, lo cual se encuentra íntimamente relacionado con lo establecido en el Art 6, lit. e, de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que es preciso señalar que únicamente se habilitará a los abogados que pretendan mostrarse parte en el presente proceso y los que se encuentren ya acreditados en el mismo, advirtiendo a las partes técnicas que deben guardar la debida cautela de la información que se maneje, en el entendido que saben que pueden enfrentar un delito penal contemplado en el artículo 338 del Código Penal, si esta información es del conocimiento de otras personas que no estén presentes en este proceso o que pueda tener una filtración de la misma.

X. PLAZO DE INVESTIGACIÓN.

La Representación Fiscal ha solicitado un plazo de instrucción de **seis meses**, y en vista de los imputados a ser investigados y la cantidad de diligencias que son necesarias realizar a efecto que se realice una pronta y cumplida justicia, el suscrito Juez autoriza **SEIS MESES**, contados a partir del día de celebración de audiencia; es decir, que el mismo concluye el día **VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, de conformidad al Art. 17 Inc. 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado, y Arts. 309, 355 y 356 del Código Procesal Penal; tiempo durante el cual el Ministerio Público, deberá de realizar las diligencias útiles que considere oportunas para poder sustentar en adelante cualquier petición con las formalidades contenidas en los artículos 355 y 356 del Código Procesal Penal y una vez vencido el mismo tendrá el Ministerio Público Fiscal el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, para presentar cualesquiera de los dictámenes regulados en el artículo 355 del Código Procesal Penal.

XI. POR TANTO, de conformidad a los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 15, y 172 de la Constitución de la República; artículo 1 de la Ley contra El Crimen Organizado, 2, 9, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966); artículos 4, 7.2, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (OEA 1969); artículos 4, 21, 37 de los Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (ONU 1988); artículos 3, 8, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948), artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA 1948); artículo 318, 324 del Código Penal; y artículos 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 129, 132 numeral 2, 133, 144, 175, 176, 177, 329 y 330 numeral 2 del Código Procesal Penal, **SE RESUELVE:**

A. ORDÉNASE LA INSTRUCCIÓN FORMAL CON LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL en contra de los imputados: **JORGE ALEJANDRO MUYSHONDT ÁLVAREZ**, a quien se le atribuye la posible comisión de los delitos calificados de manera provisional como **FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN**, previsto y sancionado en el artículo trescientos dieciocho del código penal., en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y REVELACIÓN DE HECHOS, ACTUACIONES O DOCUMENTOS SECRETOS POR EMPLEADO OFICIAL**, previsto y sancionado en el

artículo trescientos veinticuatro del código penal en perjuicio de **LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.**

B. CONTINÚE EL PROCESADO, anteriormente detallados, en la detención en que se encuentran, para lo cual, librense los oficios respectivos.

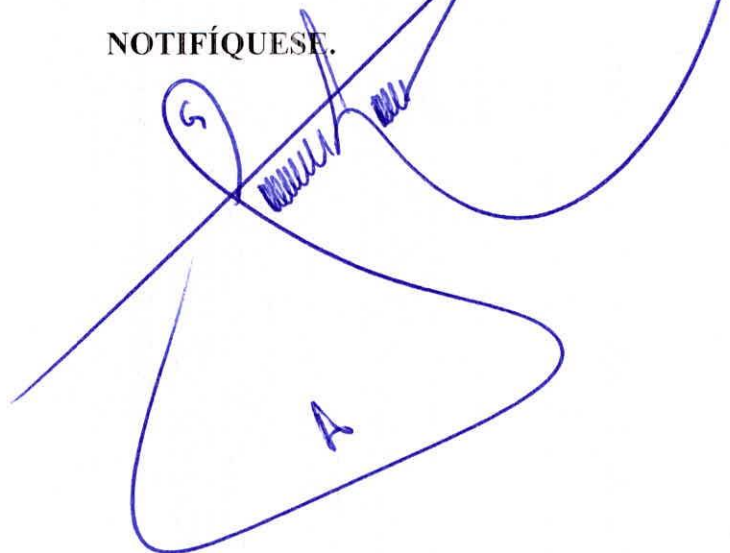
C. AUTORÍCESE UN PLAZO DE INSTRUCCIÓN de SEIS MESES, de conformidad al Art. 17 inciso 2 de la Ley Contra el Crimen Organizado y Art. 309 del Código Procesal Penal, tiempo durante el cual la representación fiscal, deberá de realizar las diligencias útiles que considere oportunas para poder sustentar más adelante cualquier petición con las formalidades de los Arts. 355 y 356 del Código Procesal Penal; dicho plazo considerado vencido finaliza el día **VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** teniendo el Ministerio Público Fiscal el plazo de CINCO DIAS HABLES, para presentar cualesquiera de los dictámenes regulados en el artículo 355 del Código Procesal Penal

D. TÉNGASE POR INCOADO EL PRONUNCIAMIENTO DE LA ACCIÓN CIVIL proveniente del delito y téngase como probable responsable civil a los imputados antes relacionados, de conformidad a lo establecido en los artículos 42, 43 y 399 inciso 3° del Código Procesal Penal.

E. RATIFIQUESE LA RESERVA TOTAL DEL PROCESO, de conformidad al Art. 307 del Código Procesal Penal.

F. ADVIERTE EL SUSCRITO JUEZ, Que en audiencia de imposición de medidas cautelares celebrada el día veinticinco del presente mes y año, de conformidad al Art. 65 de la constitución, se ordeno al Instituto de Medicina Legal, que comparezca al centro de reclusión del procesado para efectos que se le realice un reconocimiento médico de salud, lo cual se diligencio mediante oficio 280 y 281 respectivamente.

NOTIFÍQUESE.



Ante mí.

Sria